

COMPRAR LA COCA

“... pase la coca y tenga la platica”

Camilo Gonzalez Posso – INDEPAZ¹

Se han reunido politólogos y astrólogos a tratar de explicar las razones del Presidente Uribe para proponer la “recompensa” por erradicación de cultivos de coca, o, en lenguaje llano, la compra de cosechas. La idea desató la crítica en muchos ámbitos y precipitó la advertencia del todopoderoso Departamento de Estado: es una mala táctica que no nos consultó Uribe. Y a renglón seguido el Presidente, que de tanto en tanto nos sorprende con ocurrencias, recogió la pita y volvió a reafirmar que durante su gobierno “no se dejará de fumigar un solo día”. Pero para los expertos en parasicología, el fantasma de la “compra de coca” le seguirá dando vueltas al Presidente cada vez que le lleguen los informes contradictorios sobre áreas asperjadas y disminución efectiva de las exportaciones de cocaína o de los ingresos de las FARC.

Los más exotéricos llegan a suponer, sin fundamento, que en el Palacio de Nariño se han preocupado por la denuncia que ha hecho la Defensoría del Pueblo de EL ECUADOR por el impacto dañino de las fumigaciones en las poblaciones de la frontera, sustentado incluso en estudios de un grupo calificado de médicos sobre el efecto negativo en la salud de niños y adultos sometidos entre 2002 y 2004 al impacto de las fumigaciones. Ese alegato está llegando a la Corte Interamericana y está animando la documentación ante la Corte Penal Internacional de esta política como una “guerra química” contraria a tratados internacionales y susceptible de calificar como crimen de lesa humanidad.

Lo cierto es que la inquietud presidencial ha servido de pretexto para reanimar el debate sobre la necesidad de buscar alternativas a la guerra antidrogas y considerar las demandas de campesinos e indígenas. La idea de “comprar la hoja de coca” puede que no les guste a los gringos y que no sea la solución integral al problema de los cultivos de uso ilícito, pero en cambio sí puede ser un elemento en una política que estimule en Colombia la Industria Nacional de la Coca, utilizando parte de los cultivos en zonas indígenas y de campesinos pobres para producir aromáticas, jabones, licores, medicamentos y otros productos que ya se están produciendo en pequeña escala en Colombia y a mayor volumen en Perú y Bolivia. Sobre este tema en la Cámara de Representantes se radicó en la pasada legislatura un proyecto de Ley seriamente sustentado. (Revista INDEPAZ No 22 Agosto de 2004)².

Desafortunadamente las fumigaciones se han fundido con la guerra antiterrorista y cualquier discusión racional es descartada en los altos círculos que toman las decisiones y que llegan incluso a obligar a un Presidente de la República a callar con reverencia. En este dominio también hay un “índice” de palabras prohibidas y un test de lenguaje para contemporalizadores con el enemigo: “industria nacional de coca sana”, “descriminalización del campesino cultivador”, “prioridad a la reducción del consumo y a la interdicción”, “evaluación del fracaso 20 años de política antidrogas”, “estudios epidemiológicos de impacto en la salud humana”, “daño de fumigaciones con químicos a las aves, peces, insectos y especies domesticas” y ahora “erradicación manual” y “compra de hoja de coca”.

¹ Publicado en Punto de Encuentro, No. 31, abril 2005. Se reproduce por la actualidad ocho años después.

² Dario Gonzalez, Maria M Moreno, Proyecto de Ley de Coca, www.indepaz.org.co

LA OTRA GUERRA

Se habla de la guerra antidrogas como la “otra guerra” para diferenciarla y relacionarla al mismo tiempo con la “guerra antiterrorista”. Las diferencias se han marcado por los objetivos explícitos de quienes las definieron como parte de su estrategia de seguridad, pero con su despliegue en la última década y después del 11 de septiembre de 2001, la articulación se ha hecho mayor y hoy son componentes de una guerra global contra lo que los altos mandos de Washington consideran la amenaza más grande contra el imperio en la llamada posguerra fría.

Llámesese “otra guerra” o parte esencial de la estrategia militar de seguridad, lo cierto es que se ha llegado lejos desde la original política antidrogas como protección de la salud de los ciudadanos sometidos al riesgo de la adicción (Harm Reduction decía Carter) y ahora priman las consideraciones de ataque a las finanzas de grupos considerados por EE.UU como terroristas con capacidad de amenaza regional. La vieja política antidrogas se despojó de todo ropaje social y se militarizó en sus componentes internacionales.

A Colombia le ha tocado en suerte convertirse en uno de los escenarios más importantes de esta guerra. El Plan Colombia, aprobado por el Congreso de los EE.UU en julio de 2000, se propuso ante todo “reducir el suministro de drogas ilegales hacia Estados Unidos”, “romper los lazos existentes entre los grupos alzados en armas y la industria de la droga que los apoya”³, golpear el narcotráfico y disuadir a los consumidores ante un eventual incremento del precio de la cocaína, la heroína y del opio. Desde el documento original en inglés que elaboraron en el Pentágono se dio la convergencia entre el interés de los estrategas estadounidenses de incorporar el viejo conflicto interno de Colombia en su estrategia regional y global de seguridad y el “ingenio” del equipo del Presidente Pastrana en Washington (Alberto Moreno y Jaime Ruiz) de “venderles” la guerra contrainsurgente en Colombia como parte de la guerra antidrogas. Los diagnósticos sobre el narcoterrorismo o la narcoguerrilla habían abonado el terreno a esta internacionalización del conflicto y a esta simbiosis que inició una nueva fase de subordinación de los asuntos de seguridad de Colombia y de manejo del conflicto interno a la conducción estratégica de los Estados Unidos.

Cuando el Plan Colombia le dio paso al Plan Patriota se produjo un replanteamiento radical en tanto ahora la guerra antidrogas se subsumió en la guerra antiterrorista. La genialidad pastranista de meter la contrainsurgencia en la lucha contra el narcotráfico era una camisa de fuerza para la utilización a discreción de los recursos del plan Colombia – incluido el apoyo en ‘inteligencia militar’, actividades de los 400 militares y 400 contratistas – en operaciones abiertas y ofensivas contra la guerrilla. Después de la declaratoria formal de la Administración Bush de esta nueva guerra mundial,⁴ la alianza privilegiada USA – Colombia focaliza sin ambigüedad el enemigo en la amenaza terrorista y los peligros para la región. La política antidrogas se define como

³ Contraloría General de la República, Plan Colombia, Primer Informe de Evaluación, agosto de 2001

⁴ Recordemos a pocos días del fatídico 11 de septiembre 2001, la impactante imagen en el Congreso de Estados Unidos cuando Bush anuncio que la Unión entraba en Estado de Guerra.

parte de la política antiterrorista y la guerra anti subversiva en Colombia pasa a ser una pieza de la “guerra global”⁵

Son muchas las evaluaciones del fracaso del Plan Colombia y de la política de fumigaciones en el cumplimiento de las metas de reducción de la oferta de drogas ilícitas e incluso de las finanzas de los grupos armados ilegales o de los empresarios del narcotráfico. Pero son menos los balances en cuanto a geopolítica de seguridad, política antisubversiva o contra los paramilitares.

En el primer aspecto se ha demostrado que el negocio sigue viento en popa, cerca de 300 toneladas métricas de cocaína siguen entrando cada año a los Estados Unidos y más de 270 a Europa y Asia⁶. Los precios de la cocaína han estado relativamente estables en los últimos 10 años y las oscilaciones en áreas cultivadas en Colombia se han compensado con mayor productividad y con importaciones de pasta básica desde Ecuador o Perú. (ver artículos en Punto de Encuentro No 28 y 30).

La estrategia de fumigar, fumigar y fumigar, dirigida a golpear la oferta en los cultivos más que en el tráfico internacional o la distribución en Estados Unidos, se justificó por la visibilidad del objetivo y la ilusión de una relación directa entre fumigación, erradicación y oferta, pero al mismo tiempo se inscribió en los planes antiguerrilla en tanto la aspersión aérea con químicos se convirtió en parte de las operaciones para quitarle población y retaguardia social y económica a la guerrilla.

El desplazamiento se volvió funcional a la guerra quitándole población a las zonas consideradas estratégicas para la guerrilla y por ello se le dio toda la importancia a la guerra del SUR donde se localizaba el 30% de los cultivos de coca al iniciar el Plan Colombia. No es extraño que las ofensivas de fumigación hayan tenido coordinación operativa con las iniciativas del Plan Patriota y que en el último periodo (2003 – 2005) se concentren en los departamentos de Caquetá, Nariño, Putumayo y Guaviare mientras los cultivos ilegales crecen en Cordoba, magdalena medio, Meta, Arauca y Santander en zonas de influencia paramilitar. (Vargas, 2005).

Este Plan de fumigación a la lata, calculó que produciría 200.000 desplazamientos y destinó recursos para esa contingencia. Las necesidades de esta guerra han contemplado siempre la presión para obligar a grandes movimientos de población. Incluso los llamados efectos colaterales de la guerra química, que con frecuencia significan la fumigación de cultivos de subsistencia campesina, cumplen su papel secundario en la intención de debilitar el abastecimiento de los frentes subversivos.

Si queda establecido que las fumigaciones forman parte de dos frentes de guerra, el de las drogas y la guerra antiterrorista, también puede decirse que en ambos viene produciendo resultados que contradicen los objetivos del Estado Mayor del Comando Sur y de sus aliados colombianos. El impacto de una reducción de las hectáreas sembradas con coca y amapola en Colombia se hará sentir en las finanzas de las guerrillas y de los paramilitares cuando se baje de 30.000 hectáreas y se bloqueen las importaciones desde los países vecinos. Entonces la pasta básica y las cocaína cristalizada localmente subirán sensiblemente de precios compensando los balances pero sin asfixiar la economía de guerra de la subversión.

⁵ La expresión es utilizada por varios analistas. Antoni Negri en La Multitud habla de “globalización armada”; M. Klein de “Guerra por recursos”.

⁶ Ricardo Vargas Narcotráfico, guerra y política antidrogas, Acción Andina – Colombia, junio de 2005; Yamil Abdala, Revista INDEPAZ, No 22 Agosto de 2004

Desde el punto de vista logístico, las FARC pueden llegar a bajos niveles de subsistencia con 15.000 efectivos, no más de us \$45.000 mensuales de gasto de funcionamiento y menos de us\$10.000.000 en total al año. Se ha calculado que Us \$5.000.000, esa organización puede costear funcionamiento, reposición de 3000 fusiles de asalto al año y gastos mínimos de subsistencia antes de entrar en la etapa de derrota estratégica⁷. De modo que justificar las fumigaciones con la idea de cortar la yugular de las finanzas a la guerrilla es una ficción copiada del profesor Collier del Banco Mundial que no tiene que ver con la flexibilidad de la financiación ilegal de la guerrilla y si mucho con la idea equivocada de que se han transformado en delincuentes comunes y simples narcoterroristas. Con semejante desenfoque logran en cambio hacerle un favor a la guerrilla en tanto los campesinos fumigados y los que no lo son pero que no encuentran respuestas a sus demandas, miran con desconfianza al gobierno y le temen más a sus aviones y políticas de TLC y gran agroindustria exportadora que a la inhumana violencia guerrillera. Además, esta guerra contraproducente le está regalando a las FARC y al ELN un nuevo discurso nacionalista y “bolivariano” que es escuchado por sectores de la juventud urbana, sobre todo en las grandes ciudades y en círculos de ese 70% de jóvenes desempleados que no encuentran futuro.

Al gobierno y a los que dirigen esta guerra desde Miami y Washington, estos argumentos no los conmueven. Si se les dice que las fumigaciones con químicos no tienen los resultados esperados por ellos, responden que las van a intensificar y aumentan no solo la cantidad de hectáreas hasta el punto de fumigar 500.000 entre el 2002 y el 2005, sino que cambian la composición de la sustancia desfoliante de modo que la concentración llega a ser 500 veces superior a la indicada para usos agroquímicos y además se le agregan coadyuvantes para mejorar la puntería y la adherencia que son tanto o mas nocivos que el glifosato denso que están arrojando contra todo lo que se mueve en las áreas de esta absurda guerra. Y como quedan dudas sobre la relación entre la magnitud de la defoliación y el volumen de cocaína distribuida en las calles de las ciudades estadounidenses entonces vuelven a desempolvar al hongo fusarium oxysporum y algunos congresistas de ese país proponen aprobar allá, es decir donde toca, el recurso a la guerra biológica como experimento acá y no en algunas de las 200.000 hectáreas de mariguana que siembran los drogadictos gringos en sus jardines y parques naturales.

El día, y ojala no llegue, que se apruebe combinar la guerra química y la guerra biológica como parte de la estrategia de seguridad antinarcoterrorista, el Presidente Uribe o el de turno tendrá otra pesadilla y alguna ocurrencia de ocasión.

Entre tanto quedan muchos esfuerzos por hacer para que se escuchen las voces de campesinos, afrodescendientes e indígenas, como los del Macizo colombiano y de la costa pacífica, que están reclamando políticas de emergencia y cese de fumigaciones o el apoyo a iniciativas como la ecuatoriana que llama a la comunidad internacional sensible a los derechos humanos a ponerle límites a esta carrera hacia el desastre.

⁷ Cálculos similares se encuentran en el Informe sobre Conflicto y Drogas, del Internacional Crisis Group, Enero de 2005.

